



CONTRIBUCIÓN AL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS

Este documento responde a la convocatoria sobre los derechos de las mujeres en términos de labores de ciudad, contextos rurales y acceso a servicios públicos, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. El observatorio de seguridad alimentaria Food Monitor Program, enfocado en evaluar violaciones a derechos humanos relacionados a alimentos y agua potable en Cuba presenta la contribución según las preguntas planteadas por la relatoría.

1. ¿Cuáles han sido los esfuerzos realizados y los mecanismos establecidos para hacer frente a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y su impacto a largo plazo, así como las formas de aplicarlos en la respuesta del Estado parte a las crisis actuales y futuras, como los conflictos armados, la inseguridad alimentaria y la crisis energética?

Durante y tras la pandemia (COVID-19) la recesión económica internacional y la crisis sanitaria impactaron la capacidad del gobierno cubano para garantizar la seguridad alimentaria de la población en la Isla. El cierre de la economía de servicios enfocada en el turismo y la ausencia de alternativas de producción sostenibles generaron una escasez drástica de divisas para la adquisición de bienes en el mercado internacional. Este esquema, junto a las políticas económicas fallidas, como es el caso de la Tarea Ordenamiento, y la caída drástica del 67% de la producción nacional de alimentos generaron el agravamiento de la inseguridad alimentaria.[1]

Las políticas estatales que le han sucedido, para enfrentar estas condiciones, han seguido dos esquemas fundamentales. Primero, la profundización de la penalización excesiva sobre delitos comunes, así como una mayor criminalización sobre ejercicios de sobrevivencia para enfrentar la crisis. Segundo, un mayor control y racionamiento de los bienes entregados. Ambos mecanismos restrictivos no han hecho más que aumentar los contratos ilegales y el mercado negro, en ausencia de estrategias formales para la consecución de alimentos.

Dos prácticas que se han señalado como inadecuadas han sido, primero, la venta de alimentos entregados por organismos como el PNUD como donativos (pastas alimenticias, aceite de cocina, arroz, conservas de sardinas), luego vendidos por el Estado en el sistema nacional de bodegas. Además, la entrega/venta puntual de productos se ha identificado como una forma de garantizar consenso y válvula de escape ante eventos de insatisfacción ciudadana como protestas. Ante la escasez de bienes y servicios, han aumentado considerablemente los estallidos populares siendo los más multitudinarios los ocurridos el 11 de julio de 2021 (nacional), septiembre 2022 (La Habana), mayo 2023 (Guantánamo), mayo 2024 (La Habana); donde las principales demandas eran la garantía de comida, energía y agua potable a gritos, por ejemplo, de "comida y corriente". Tras cada uno de estos eventos el Gobierno ha utilizado la entrega condicionada de productos limitados, como forma de apaciguamiento.[2]

Asimismo, FMP ha recogido testimonios sobre el incremento de la incertidumbre, el estrés y la depresión relacionada a la escasez y al control sobre la distribución.

[1] Nota de prensa N° 21. "Un país sin comida: caída drástica de la producción en Cuba" Food Monitor Program. 8.05.2024, en: <https://www.foodmonitorprogram.org/nota-de-prensa-no-21/>

[2] "Inseguridad alimentaria detrás de las protestas sociales en Caimanera" Food Monitor Program. 27.06.2023, en: <https://www.foodmonitorprogram.org/columna-inseguridad-alimentaria-detras-de-las-protestas-sociales-en-caimanera>

En este sentido, se nota una naturalización de la precariedad, así como un sesgo de lo que se entiende por canasta básica, seguridad nutricional y alimentaria. Específicamente en zonas periurbanas y rurales, donde se muestra mayor inestabilidad y falta de inocuidad en la entrega de alimentos y servicios básicos, la mayoría de los entrevistados interpretan sus accesos como “buenos” o “seguros” a partir de los límites en la distribución y los turnos donde se recibe agua potable o gas manufacturado para la cocción.[3] Otros entrevistados aseguran intentar adaptarse a las circunstancias, por ejemplo, reduciendo o eliminando una toma de alimentos al día, y sustituyendo alimentos. Una de las evidencias más relevantes al respecto es la toma de infusiones a falta de leche, así como recurrir a alimentos más ricos en carbohidratos (pan, galletas) y azúcar, a falta de los nutrientes necesarios.[4]

Además, con un servicio de internet costoso, una red móvil lenta y defectuosa y una población altamente envejecida, el acceso a pagos digitales también ha marcado mayores tribulaciones, sobre todo a personas mayores de 65 años viviendo solas o en compañía de otros adultos mayores. El aumento de las condiciones de vulnerabilidad ante la falta de acceso a bienes y servicios relacionados a la alimentación tampoco han sido abordados oportunamente por el Estado, sino que dicha población ha aumentado su dependencia a terceros, así como iniciativas informales en la comunidad. A la pregunta a damnificados por eventos naturales y personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿Qué recursos o asistencias ha recibido por parte del gobierno local o nacional ante estas dificultades? el 83% de los entrevistados ha declarado que ninguna y/ que desconoce la existencia de estas ayudas en su contexto más cercano.[6]



Este escenario se ha visto empeorado con medidas económicas subsiguientes que muestran un creciente capitalismo de Estado, a través de la dolarización y bancarización del mercado, y la plataformización de alimentos básicos.[5] Estas medidas y acuerdos no explícitos tomados por el Gobierno han aumentado la desigualdad social y el inaccess a los alimentos en tanto la mayoría de la población no recibe remesas, divisas, ni posee cuenta bancaria en el extranjero con la que comprar alimentos en los mercados online.

2. ¿Cuales han sido las medidas adoptadas para garantizar la seguridad alimentaria de las mujeres del medio rural, habida cuenta de los efectos del cambio climático?

En medio de la mencionada polícrisis, las áreas periurbanas y rurales se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad al depender de un sistema de provisión controlado. Las políticas de abasto en Cuba han tenido tradicionalmente un prejuicio urbano: garantizar el acceso a los alimentos a las mayores poblaciones concentradas en cabeceras de provincias. Según testimonios recogidos por FMP la producción o distribución de alimentos como lácteos, pan, granos y café se ha visto significativamente afectadas en estas áreas, con demoras de hasta tres meses, deterioro en la calidad y recorte de la cantidad de productos entregados. Tanto por lo anterior, como por el deterioro de la infraestructura y la escasez de combustible necesarios para el transporte y la conservación de alimentos, la población rural ha estado relegada e invisibilizada en temas de seguridad alimentaria.

[3] Consultar al respecto entrevistas realizadas por FMP en áreas de rurales y de difícil acceso, en: <https://www.foodmonitorprogram.org/entrevistas-alimentacion-en-zonas-rurales>

[4] Consultar al respecto los testimonios recabados por FMP en: <https://www.foodmonitorprogram.org/testimonios>

[5] Especial “Bancarización y escasez de efectivo” Food Monitor Program, agosto de 2023 en: <https://www.foodmonitorprogram.org/especial-de-bancarizacion-y-escasez-de-efectivo>

[6] Ante la inseguridad energética e hídrica FMP ha realizado encuestas donde esta información es reiterada, consultar: <https://www.foodmonitorprogram.org/entrevistas-inseguridad-energetica> y <https://www.foodmonitorprogram.org/entrevista-seguridad-hidrica>

Tanto la inseguridad hídrica como energética se recientes más en estas áreas, principalmente a la hora de cocinar los alimentos. El recorte de gas licuado ha conllevado a la mayoría de estos hogares a buscar alternativas de cocción con combustibles sólidos dañinos para la salud. La falta de conexiones de agua potable al interior del hogar también determina el acarreo del líquido desde el exterior, a veces fuera de la propiedad. En estas condiciones se encuentran más expuestas las féminas, ya que son tradicionalmente las relegadas a las tareas del hogar y al cuidado de personas en condiciones de vulnerabilidad.

A esto se le suma la naturaleza criminogénica de la crisis económica. En los últimos años han aumentado los casos de sacrificio ilegal de animales, así como el robo de cultivos e implementos de trabajo.[7] Igualmente, la crisis multifactorial acrecienta la violencia doméstica y amplifica la falta de oportunidades para la emancipación, ya que el campo cubano continúa siendo bastante tradicionalista y conservador. En el mismo sentido, En el ámbito rural predomina una división sexual del trabajo que cataloga a las mujeres como "ideales" para el ámbito doméstico, para realizar actividades, ayudas y oficios no remunerados o que no generan suficientes ingresos. Ello se complejiza en contextos de crisis, donde las dinámicas de cuidado presionan un mayor rol social a cargo de niños, ancianos, personas con discapacidad y enfermos.



Las mujeres rurales no cuentan con las mismas oportunidades de empleos que los hombres. Según cifras oficiales más del 60% de la población femenina rural no tiene vínculos laborales. Aunque las mujeres representan el 46,3% de la población rural (que a su vez representa en 24% de la población de la Isla), la desigualdad en el acceso al empleo, a la gestión de la tierra, y en el sector agropecuario muestran el desaprovechamiento del potencial del trabajo femenino en sectores estratégicos del plan de desarrollo del país.

En general se documentan escasas políticas para asegurar mayor autonomía alimentaria y participación en el sistema alimentario nacional en las mujeres cubanas residiendo en áreas rurales. Permanecen desigualdades de base como desventaja en el acceso a procesos de formación y capacitación, en el acceso a la tecnología, en la movilidad desde sus comunidades a cabeceras municipales, que dificultan la seguridad alimentaria de este grupo poblacional. Una de las desigualdades más concretas en este sentido es la gestión de los recursos naturales. La escasez de agua potable, en ciclos de distribución que pueden demorarse hasta 14 días en programas normales y 21 ante algún fallo estructural, impacta directamente en la economía familiar, al dedicar más recursos (tiempo, trabajo, energías, dinero) para acceder al agua potable. Las mujeres rurales experimentan mayores niveles de sobrecarga al contar con menos infraestructura que garantice su bienestar.



Fuentes principales:

FMP (2022) "Del "estímulo material" al "chantaje alimentario"", en: <https://www.foodmonitorprogram.org/columna-del-estimulo-material-al-chantaje-alimentario>.

FMP (2024). Alimentación en zonas semirurales, en: <https://www.foodmonitorprogram.org/entrevistas-alimentacion-en-zonas-rurales>

FMP (2022). Alimentación dentro del mercado negro y como sobrevivencia, en: <https://www.foodmonitorprogram.org/entrevistas-mercado-negro-y-sobrevivencia>

FMP (2022). Inseguridad energética, en: <https://www.foodmonitorprogram.org/entrevistas-inseguridad-energetica>